

Artículo de coyuntura

Escribe: Pilar Arroyo R.P.

UN MES COMPLICADO

Febrero ha estado marcado por una agenda centrada en la llegada de las primeras vacunas, el escándalo originado por el llamado Vacunagate y el proceso electoral.

LA LLEGADA DE LAS PRIMERAS VACUNAS

Hay que reconocer que a partir de que se supo, por una información del semanario británico *The Economist*, que el Perú estaba rezagado en los contratos para acceder a las vacunas, el gobierno de Francisco Sagasti se movió rápidamente y logró avanzar en las negociaciones con una serie de laboratorios farmacéuticos, habiéndose firmado, a la fecha, los siguientes contratos:

Laboratorio	Cantidad de vacunas acordadas
Sinopharm (China)	38 millones
Pfizer (EE.UU.)	20 “
Covax (Astra Zeneca-Pfizer)	13 “
Astra Zeneca (Anglo-Sueca)	14 “
Total	85 Millones

Recordemos que son dos dosis por persona. El objetivo es vacunar a 24,5 millones de personas mayores de 18 años; pues, como es sabido, todavía no hay una vacuna probada para administrar a menores de edad. Sin embargo, debido a las dificultades que se están teniendo a nivel mundial en la producción de vacunas, recién se estima que se terminará de vacunar a dicha población en el primer semestre del 2022. Esto significa que todavía tenemos un largo camino por recorrer para protegernos contra el COVID-19 y que la crisis tiene para rato, pues

no estaremos seguros hasta que no hayamos vacunado al 70% de la población peruana.

La demora en la provisión de vacunas es absoluta responsabilidad de los grandes monopolios farmacéuticos mundiales, el llamado Big Pharma. A pesar que la investigación ha sido financiada con fondos públicos la propiedad final de la vacuna sigue siendo de las empresas (Pfizer, Astra Zeneca, etc.) quienes detentan las patentes. Por eso las empresas han prácticamente impuesto a los diversos estados las condiciones de suministro y venta de las vacunas. Por ejemplo, ellas son las que han incorporado una cláusula, llamada de confidencialidad, que prohíbe a los estados hacer públicos los contratos o dar a conocer el precio pagado por las vacunas, so pena de suspender el suministro de las mismas a sus estados. Esto genera gran desconfianza en la opinión pública mundial, sensible frente al grave problema de corrupción que afronta el mundo.

Pero también son las grandes farmacéuticas las que han rechazado el pedido hecho ante la Organización Mundial del Comercio por diversos países (India, Sudáfrica, etc.) para que se deje de lado las patentes y dado que estamos en una emergencia mundial, cualquier país que esté en posibilidades de hacerlo pueda producirlas como genéricos. El pedido fue respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero más pesaron los intereses del capital farmacéutico mundial, lo que nos recordó la plena vigencia de lo afirmado por el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que estamos frente a una economía que mata (cf. n.53).

Como denuncia Tahir Amin, el pasado mes de mayo el director ejecutivo de Pfizer desestimó como "absurdos" y "peligrosos" los esfuerzos de la OMS para alentar a las empresas a compartir voluntariamente su tecnología y propiedad intelectual con el fin de hacer más disponibles las vacunas, los tratamientos y otros productos necesarios en la lucha contra el COVID-19.

Esto a pesar que el dinero de los contribuyentes y de las organizaciones sin fines de lucro han financiado significativamente la mayoría de las principales vacunas COVID-19, así como el desarrollo de la ciencia básica subyacente a la plataforma de ARN, que usan Pfizer, Curevac y Moderna¹. Hay que recordar que las farmacéuticas tomaron la iniciativa solo después de que los sectores público y sin fines de lucro asumieron la mayor parte del riesgo.

¹) Esta tecnología tiene un 95% de eficacia. Utiliza tecnología ARN (Acido Ribonucleico) que no necesita el virus, sino solo su código genético que lleva "instrucciones" para que células del cuerpo generen proteínas protectoras contra el virus. Nunca antes se había utilizado en la producción de vacunas. El problema es que requiere refrigeración a 80 grados centígrados, difícil de encontrar en la mayoría de países como los nuestros. Se dijo que tendríamos que adquirir unos 10,292 equipos de cadena de frío y ultracongeladores de última generación para preservarla; lo que aumenta el costo y demora su aplicación.

Amin señala que sería un fracaso moral catastrófico —y un fracaso de la política de mercado— permitir que los intereses privados busquen ganancias de la tecnología financiada con fondos públicos mientras mueren millones².

Otro obstáculo importante para el avance de la vacunación a nivel mundial es el llamado “nacionalismo de las vacunas” en referencia al hecho que los países ricos han acumulado la mayor cantidad de pedidos. La población de los países ricos es el 19% de la población mundial, pero han pedido para ellos el 60% de la fabricación de las vacunas. Por ejemplo, Canadá reservó dosis por cinco veces su población³. El ex Ministro de Salud Víctor Zamora afirma que la organización internacional *Médicos Sin Fronteras* calcula que el 97.3% de las vacunas producidas hasta ahora han sido entregadas a los países más ricos. Estos países parecen haber olvidado lo que señala Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, “Esta crisis no habrá terminado para nadie hasta que no encontremos una solución para todos”⁴.

EL ESCÁNDALO DE LAS VACUNAS VIP O VACUNAGATE

Así se ha llamado a la revelación de que se usaron indebidamente parte de las 2,000 dosis extras del ensayo clínico sobre la vacuna Sinopharm para vacunar a funcionarios públicos (hasta ahora se conoce que son 122), políticos, y empresarios (aproximadamente 69 personas), así como a quienes (aproximadamente 242 personas) que formaban parte del personal del estudio clínico.

El ensayo era llevado a cabo por la Universidad Privada Cayetano Heredia, en colaboración con la estatal Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los detalles del caso han sido tratados in extenso no solo en los medios de comunicación, sino en el mundo digital. Por eso, solo haremos unos pocos comentarios:

1.- Es claro que hubo un aprovechamiento de una posición de poder para beneficio personal, lo que ha sido ampliamente condenado en los medios de comunicación, las redes sociales, la sociedad civil y la Iglesia Católica.

²) Cf. The Folly of Hoarding Knowledge in the COVID-19. Age Let Vaccine Producers in Poor Countries Help End the Pandemic. *Foreign Affairs*, January 29, 2021. Se puede bajar de

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-01-29/foolly-hoarding-knowledge-covid-19-age?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Accomplice%20to%20Carnage&utm_content=20210209&utm_term=FA%20Today%20-%20112017

³) Cf. [Yanzhong Huang](#) Why the World Lost to the Pandemic Politics and Security Fears Crippled the Collective Response *Foreign Affairs* January 28, 2021,

⁴) Carta anual, 2021 Las cinco oportunidades para los niños que debemos aprovechar ahora Reimaginar el Futuro para cada niño, febrero 2021, p.12.

Sociedad Civil: “El escándalo de las vacunas VIP es un grave hecho de corrupción. La tolerancia a la opacidad, falta de protocolos claros y públicos, arbitrariedad en la asignación de vacunas, excusas particulares y privilegios expuestos en este caso configuran un escandaloso hecho de corrupción que se debe investigar y sancionar”⁵.

Iglesia Católica: “El Perú, una vez más, es golpeado por el reprochable proceder de algunas autoridades que se han beneficiado egoístamente, dejando de lado los intereses del país, el bien común y su obligación de velar por los más necesitados, los que están en primera línea de lucha contra la pandemia. La Conferencia Episcopal Peruana expresa su rechazo a la utilización indebida de las vacunas confiadas a nuestras autoridades en bien de la investigación y la salud de todos los peruanos. Esto muestra un nuevo rostro del monstruo de la corrupción y de la crisis ética y de valores que impide la auténtica realización de la justicia y el desarrollo del país”⁶.

2.- Pero también es claro que el vacunagate se ha convertido en una **potente arma** en manos de muchos sectores (públicos y privados) que hoy fingen una tremenda indignación ética y sobredimensionan el caso. En realidad tienen su propia agenda subalterna, ya sea que buscan ejercer venganzas personales, avanzar sus propias fichas de poder en las instituciones públicas y privadas afectadas, o justificar a posteriori la intentona golpista del 14 de noviembre del 2020.

En este último caso tenemos que incluir, lamentablemente, a la mayoría de los miembros del actual Congreso, cuyo cargamontón tiene ese objetivo y cuya comisión investigadora carece de toda seriedad, siendo su mayor objetivo eliminar políticamente a Martín Vizcarra. Hay que estar atentos para no hacerles el juego. Y también en esta línea se encuentran sectores de la ultraderecha que se sumaron al golpe y ahora aprovechan la situación para tratar de revertir el desprestigio que les ocasionó su intentona golpista. Algunos llegan hasta el delirio de acusar de este escándalo a los “gobiernos comunistas, caviares” como el de Francisco Sagasti.

3.- El escándalo también está siendo aprovechado por un sector privado que hace varios meses pugna por permitir que el acceso a la vacuna también dependa de mecanismos de mercado. Como señala el comunicado de la sociedad civil, anteriormente citado “Siendo la vacuna contra el COVID 19 un bien público al que tienen derecho todas las personas, se debe garantizar el acceso a éstas en forma universal, gratuita y oportuna. Nadie puede ser discriminado del uso de la vacuna y su gestión es de total responsabilidad del Estado. Preocupa que, a pesar de la gran expectativa de la población para acceder a ella, su alcance pueda estar

⁵)Comunicado, Recuperar el Estado para la Gente: vacunación universal y gratuita sin corrupción. Comunicado del 18 de febrero 2021. Se puede bajar de <https://derechoshumanos.pe/2021/02/recuperar-el-estado-para-la-gente-vacunacion-universal-y-gratuita-sin-privilegios-ni-corrupcion/>

⁶) Conferencia Episcopal Peruana, Comunicado del 17 de febrero 2021.

amenazado por el lobby de algunos grupos empresariales que argumentan que su participación mejoraría la eficiencia de la distribución. Por el contrario, advertimos que esa participación constituiría el primer paso de la privatización y mercantilización de la vacuna, convirtiéndose así en un factor más de agudización de las desigualdades y exclusiones.

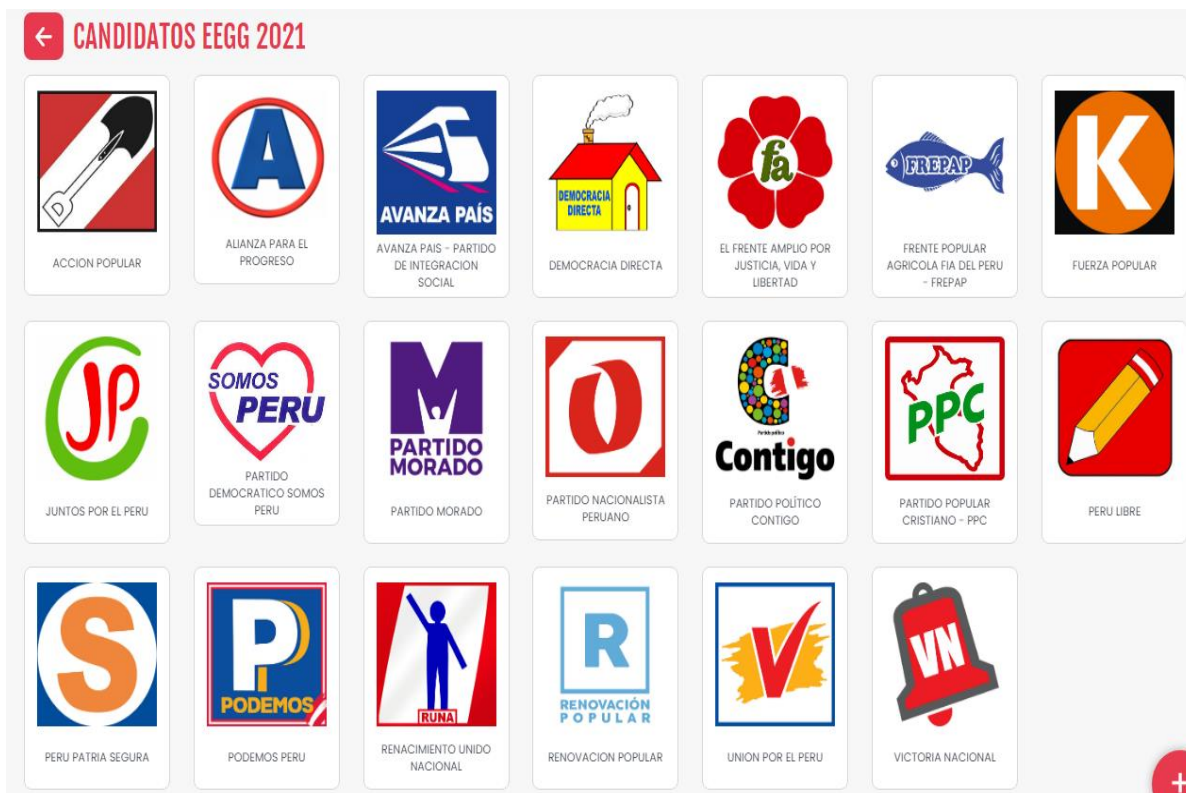
4.- Por último, hay que reconocer que el llamado vacunagate aumenta la desconfianza de la población en la élite política, empresarial y en los funcionarios estatales. Los casos Odebrechet (Lava Jato), los “cuellos blancos” (sobre la corrupción en la administración de justicia) y “club de la construcción” (sobre la corrupción empresarial) ya habían golpeado fuertemente esa confianza y el presente escándalo la profundiza y amplía al sector académico.

Por eso es importante, como señala el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, que ¡No nos dejemos robar la esperanza!, que no nos resignemos con la popular frase “sálvese el que pueda” ni con la tan conocida “el que puede puede” que normaliza en el sentido común los privilegios de unos cuantos. Por ello, es importante que nos organicemos para seguir bregando, desde donde estemos, contra la corrupción y para exigir que el Estado garantice nuestro derechos básicos, como salud, educación, alimentación etc. Como dice el comunicado de la sociedad civil “La participación es una garantía contra la corrupción y un medio para recuperar la confianza y la esperanza perdidas con el escándalo”.

EL PROCESO ELECTORAL EN MARCHA

El caso anteriormente comentado reafirma nuestra gran responsabilidad frente a las elecciones del 11 de abril. Necesitamos encargar el manejo de los asuntos públicos a gente preparada, honesta, íntegra, transparente, como señalaba el Papa Francisco “a políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres” (*Evangelii Gaudium n.205*).

Según las tres principales encuestadoras (IEP, Ipsos, Datum) la mayoría del electorado todavía no ha decidido su voto, sólo 20% lo ha hecho. Esto coincide con estudios (del Jurado Nacional de Elecciones, de Ipsos, etc.) que señalan que en anteriores elecciones el 27% del electorado lo hace un mes antes, 17% una semana antes y 22% el mismo día de los comicios. Recordemos que se presentan 20 listas, 18 a las presidenciales y 20 al Congreso, cuyos símbolos son los siguientes:



Las tres encuestadoras anteriormente mencionadas señalan que los cinco candidatos que lideran las encuestas son George Forsyth de Victoria Nacional, Johny Lescano de Acción Popular, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Julio Guzmán del Partido Morado. Por eso nos parece importante señalar que plantean estos cinco aspirantes a la presidencia sobre el agudo problema de la corrupción, tal como lo expresaron en el evento que IPAPE (Instituto Peruano de Administración de Empresas) organizó el jueves 18 y viernes 19 de febrero.

En dicha oportunidad no estuvo presente Lescano, porque según los lineamientos del *Bloque Electoral de CADE Ejecutivo* se invita a los 4 primeros al 20 de enero y el candidato de Acción Popular recién repuntó en las encuestas a inicios de febrero⁷. Los invitados plantearon sus propuestas en siete temas: educación, salud, generación de empleo y entorno de negocios, política social, función pública y eficiencia del Estado, equilibrio fiscal y fundamentos macroeconómicos; y corrupción.

George Forsyth

El candidato de Victoria Nacional plantea incorporar en la Constitución normas que permitan disminuir la corrupción. También buscará democratizar la

⁷) Si se desea ver el evento completo, acceder a <https://www.youtube.com/user/CADEPERU>
 Mayores detalles se pueden encontrar en sus respectivos planes de gobierno en <https://votoinformado.jne.gob.pe/voto/>

justicia introduciendo los jurados ciudadanos, al estilo anglosajón. Y ofrece crear una Comisión anti corrupción de Alto Nivel e implementar un programa de recompensas.

Keiko Fujimori

La candidata de Fuerza Popular ofrece fortalecer la labor de la Contraloría, así como también implementar en 100% un sistema de transparencia y hacer una alianza con la ciudadanía para que sea un actor activo en la lucha contra la corrupción, mediante sus denuncias.

Verónica Mendoza

La candidata de Juntos por el Perú, ofrece promover la transparencia de la función estatal, fortalecer la vigilancia y el control ciudadano y fortalecer la autonomía del sistema de justicia para que investigue con independencia todo caso de corrupción.

Julio Guzmán

El candidato del Partido Morado, propone promover, fortalecer y apoyar la labor de la Junta Nacional de Justicia, institución encargada de nombrar, evaluar y destituir a jueces y fiscales. También crear un equipo anticorrupción permanente en el Poder Judicial y cambiar el enfoque de la Contraloría para trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo mientras se desarrollan las obras. Hoy la Contraloría solo interviene a posteriori, cuando el delito ya se ha cometido. Lo que propone se llama técnicamente “control concurrente”.

Johny Lescano

El candidato de Acción Popular, en su Plan de Gobierno ofrece acabar con la corrupción en el estado, y reinstaurar el valor de la integridad y en la gestión pública, devolviendo la confianza del pueblo en las instituciones públicas. También ofrece sistematizar los procesos logísticos y efectivizar el control del gasto a fin de evitar la corrupción en los procesos de compras y de licitaciones para el abastecimiento de bienes y servicios.

El Papa Francisco nos dice que “Hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común” (*Fratelli tutti*, n.154). Ejerciendo este 11 de abril nuestro derecho al voto y cumpliendo con nuestra responsabilidad de que sea un voto informado, podemos avanzar en ese objetivo

Lima, 23 de febrero de 2021